

Iglesia y lo público. Se estudia la posición jurídica de las Iglesias en la constitución de Bonn y la constitución de Weimar, que ha variado enormemente en relación con su tradicional posición histórica, hasta el punto de que hoy ya nadie admite una *Kirchenhoheit* o soberanía del Estado sobre las Iglesias protestantes de Alemania, principalmente en base al principio de libertad religiosa que sanciona la constitución. A su vez las relaciones entre las iglesias y el Estado que dan lugar a los *Kirchenverträge* se plantean hoy bajo distintos presupuestos, como se manifiestan en los preámbulos de los *Kirchenverträge*, a partir del de Baja Sajonia de 1955. Se parte del presupuesto de que las iglesias no están sometidas al Estado, y por tanto de que los *Kirchenverträge* no pueden caracterizarse como un tratado de Derecho público entre el Estado y una corporación a él subordinada, sin que esto signifique que puedan, como los concordatos, ser calificados de tratados de Derecho internacional. Las iglesias poseen independencia y capacidad de autodeterminación y cuando el Estado concluye un contrato con ellas no compromete su neutralidad religiosa ni las iglesias su autonomía. Esos tratados obedecen a una necesidad práctica de coordinación en que sin indebidas ingerencias se crean normas jurídicas que son necesarias para la vida pública del país.

JOSE M. GONZALEZ DEL VALLE

COOPERADORES DEL OBISPO DIOCESANO

Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, *Współpracownicy Biskupa Diecezjalnego W Pastorskim Posługiwaniu*, 1 vol. de 320 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1977.

El presente volumen es la segunda edición corregida y aumentada de la obra cuyo título en castellano sería *Cooperadores del Obispo diocesano en el munus pastoral*. La primera edición de este manual se ha publicado en 1968. Como no es fácil de prever cuándo se promulgará la nueva legislación canónica en sustitución del Codex, se ha publicado esta segunda edición del presente manual con la finalidad de incluir algunos documentos jurídicos promulgados en los últimos tiempos y relacionados con la temática de los cooperadores del obispo diocesano. Se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a) *Litterae* circulares S. Congregationis pro Clericis «De Consiliis Presbyteralibus» (1970) et «De Consiliis Pastoralibus» (1974) y el *Directorium* S. Congregationis pro Episcopis «Ecclesiae imago» (1973).

El volumen está dividido en XI Capítulos en los cuales se trata: 1) De los obispos coadjutores y auxiliares; 2) Del Sínodo diocesano; 3) De la Curia y

de los Consejos diocesanos: § 1 Curia diocesana: a) prenotandos, b) Vicario general; c) Vicario episcopal; d) Canciller y notarios; e) archivo episcopal; f) examinadores sinodales, párrocos y consultores; § 2 Consejos diocesanos: a) Cabildo Catedral como Consejo del obispo, b) Consultores diocesanos, c) Consejo presbiteral, d) Consejo Pastoral, e) Comisiones diocesanas: a. Comisión de liturgia sagrada, b. Comisión de música sagrada, c. Comisión de arte sagrada, d. Comisión ecuménica; f. Consejo administrativo y g. Necesidad del trabajo de coordinación; 4) Ordinarios personales: § 1 Vicario castrense, § 2 Prelado personal, § 3 Delegado para los Capellanes misionarios de los emigrantes; 5) De la sede impedida o vacante; 6) De los Cabildos de canónigos; 7) De los vicarios foráneos; 8) De los párrocos; 9) De los Vicarios parroquiales; 10) De los rectores de las Iglesias; 11) Del diaconado permanente.

Como se ve, es un tratado de Organización eclesiástica diocesana destinado a los alumnos de la Facultad de Derecho Canónico.

JOSE ANTONIO MARQUES

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PIO VITO PINTO, *La giustizia amministrativa della Chiesa*, 1 vol. de XIV + 477 págs., Ed. Giuffrè, Milano, 1977.

Como quiera que las instituciones de la justicia administrativa en la Iglesia son novedosas e incompletas en su actual configuración, nada tiene de extraño que su estudio cuente todavía con pocos aunque selectos cultivadores, a los que en el plano de la teoría viene ahora a sumarse con la publicación de esta obra quien durante seis años prestó sus servicios en el tribunal contencioso-administrativo eclesiástico (Sección 2.ª de la Signatura Apostólica).

Mucho hay por hacer en el campo del Derecho administrativo de la Iglesia, ya que apenas iniciamos los primeros balbuceos, y a nuestro juicio no deben esperarse resultados notables por vía legislativa, opinión que corroboran tanto la lectura de los esquemas sobre la materia, como la experiencia de los más caracterizados países. Deberá ser precisamente el juez administrativo —tal como en Francia lo hizo el Conseil d'Etat— el que aunando la *prudentia iuris* con una adecuada valoración del interés general, realice la enucleación y fijación de los principios juridicoadministrativos en la Iglesia.

Lo dicho permite comprender por qué muchos ojos se volvieron esperanzados a la **Sectio altera** a partir de 1969 en busca de las coordenadas que definan su actuación, estudiando en las poquísimas decisio-